

A PROPÓSITO DEL PLAN “ARGENTINA SIN HAMBRE”
LA TENSION ENTRE LA EVALUACION TECNOCRATICA
Y EL MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Nerio Neirotti^[1]



El Plan “Argentina sin Hambre”, presentado en diversos espacios y difundido a través de los medios de comunicación, constituye uno de los desafíos de inmediata implementación por parte del próximo gobierno. El mismo se orientará a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, su adecuada comercialización, la diversificación de opciones. Contemplará también aspectos educativos, organizativos y culturales relacionados con la nutrición (las transferencias, vía tarjetas codificadas de compras de alimentos, estarán dirigidas a las madres con hijos e hijas menores de seis años). Se apuntará además a resolver el problema del endeudamiento de las familias y se incluirá el desarrollo de la infraestructura social básica de los barrios (especialmente la provisión de agua potable) y la generación de empleo relacionado con cinco sectores productivos: construcción, alimentos, textil, reciclado y economía de los cuidados personales.

El Plan está animado por un espíritu federal, que requiere un esquema descentralizado de la gestión, la conformación de canastas básicas según las características de las regiones y una lógica de diseño de abajo hacia arriba. En relación con la arquitectura institucional, contará con un Consejo Nacional (que dependerá del Presidente de la Nación), aunque también se contemplará la organización de consejos regionales y locales, y un observatorio a través del cual se hará el seguimiento y la evaluación del Plan. En esta nota reflexionamos sobre este último aspecto.

¿Vale la pena hablar de evaluación en momentos en que lo necesario es tomar medidas urgentes como la de atajar el incremento atroz del hambre en la Argentina? ¿No será una pérdida de tiempo o una jactancia propia de expertos y académicos? Nada más lejos que eso, si se considera a la evaluación como una reflexión valorativa sobre la práctica, indispensable para orientarse en el rumbo adecuado; mucho más cuando se trata de una

estrategia multifacética de intervención, que contempla distintos sectores (economía, producción, desarrollo social, educación, salud, infraestructura, etc.), varios niveles de gobierno y una abierta participación de la sociedad civil.

Aunque cabe aclarar que existen diferentes perspectivas en evaluación. Ha sido muy difundida la perspectiva llamada “tecnocrática”^[2], impulsada entre otros organismos por el Banco Mundial, que se apoya en modelos construidos desde ámbitos cerrados de técnicos y especialistas (trátase de laboratorios, institutos, espacios académicos) con estándares de tipo universal (aplicables a múltiples situaciones sin tener en cuenta su heterogeneidad). Esta línea de trabajo tiene pretensiones rigurosas desde el punto de vista metodológico pero suele ser reacia a la participación (no se la excluye, porque resulta políticamente correcto hablar de ella, pero termina asignándosele un rol marginal). Sin dejar de afirmar la necesidad y la importancia de contar con equipos técnicos especializados, quienes abogamos por una orientación democrática de la evaluación entendemos que debe contemplar las situaciones específicas y diversas tal como lo aconseja la planificación estratégica, no sólo “escuchar” las voces de los involucrados en la política a evaluar (en calidad de informantes) sino también generar instancias de participación de los mismos, sin perder por esto rigurosidad científica.

La perspectiva tecnocrática, según la cual el saber de los técnicos es casi excluyente, se inclina por la realización de experimentos en virtud de los cuales se llevan los “beneficios” a un sector de la población y se excluye a otros de modo premeditado y planificado, a fin de poder compararlos y así comprobar las bondades de la política en cuestión. Se trata de modelos llamados experimentales, que reproducen condiciones de laboratorio, con grupos de intervención y grupos de control. Se manipulan variables con desconocimiento de la ética, afirmando que el “sacrificio” temporal será compensado con creces cuando la política pase a una etapa en la que se extienda a toda la población y a otras poblaciones. Las metodologías propias del positivismo empírico tienen primacía en este enfoque y se da por supuesto que los resultados de la evaluación se pueden proyectar hacia grandes espacios poblacionales.

Además, en esta línea, en función de la inquietud por hacer buen uso del “gasto” social y de los recursos en general, se busca comprobar los niveles de eficiencia (relación gasto / productos) y la efectividad (magnitud de las transformaciones) con una mirada unilateral desde la cual se “controla” el desempeño de los agentes de la política.

Desde una perspectiva democrática afirmamos que, sin dejar de lado la búsqueda de una adecuada “inversión” (no gasto) social, de la eficiencia y de la efectividad, la evaluación debe ir más allá para buscar entender mejor las políticas públicas, aprender de la experiencia, constatar en qué medida se están efectivizando los derechos de la ciudadanía e impulsar procesos de mejora continua. Además de establecer indicadores generales de evaluación tales como como en este caso podrían ser los de talla y peso de los niños y niñas (para estimar la disminución de la desnutrición) y los que refieren a la mejora de condiciones relacionadas con las distintas líneas de acción del Plan (el crecimiento del ingreso familiar, el nivel de empleo, la mejora en la infraestructura, etc.) será menester indagar sobre la mejora en la organización comunitaria y el crecimiento del capital social, el conocimiento y las capacidades adquiridas por las personas que intervienen (desde las madres, los productores, los trabajadores y los dirigentes comunitarios hasta los que participan en distintos niveles y áreas gubernamentales de la gestión).

Tal como ha señalado el Diputado Daniel Arroyo en diversas presentaciones públicas del Plan, no es posible pensar en modalidades iguales en una geografía tan diversa. La localidad de Comodoro Rivadavia (Chubut) tiene necesidades y requiere soluciones diferentes a las de Godoy Cruz (Mendoza) o de Famaillá (Tucumán). Es menester avanzar de inmediato a la largo y a lo ancho de toda la geografía nacional, lo cual implica que, al no contar con un conocimiento que abarque toda la realidad geográfica, institucional, social y cultural sobre la que se va a trabajar, el único camino para actuar pronto es apelar a la participación, el discernimiento y la creatividad local. Y solamente se puede evaluar y seguir bien una política si se tienen en cuenta estos saberes partiendo de abajo hacia arriba, tal como se ha señalado que será el *modus operandi* del Plan.

En esta línea, se impone coproducir conocimiento con los múltiples actores intervinientes, teniendo en cuenta sus valores, intereses y puntos de vista. Para ello habrá que construir canales estables de consulta y participación desde los equipos operativos, que les permitan tener mejor comprensión de la realidad sobre la que se trabaja y una retroalimentación de los análisis, a la vez que dar voz con un sentido igualitario a los participantes en juego.

Tampoco se puede esperar a obrar por etapas dado que se trata de parar la caída en la alimentación de modo urgente para luego pasar a la recuperación. Más aún, se descarta de plano la posibilidad de imaginar una estrategia intencional de dejar poblaciones excluidas del Plan con el propósito de someterlas a una comparación

evaluativa puesto que estamos refiriéndonos a un derecho humano fundamental para todos y todas y consideramos antiético tomar sectores de la población como conejillos de Indias.

La perspectiva democrática de la evaluación va de la mano con la planificación estratégica, tiene en cuenta las interacciones de los actores (ya se trate de situaciones de cooperación o de tensión), las situaciones diferentes de cada uno de ellos, las diferencias por región o localidad como así también condiciones cambiantes del medio en el que se desarrolla la política pública y los posibles escenarios futuros.

Abrirse a las distintas perspectivas multiactorales, combinar metodologías cuantitativas y cualitativas, gestionar la evaluación con un amplio sistema en red y proveer una estrategia de capacitación intensiva y progresiva para la evaluación en todo el país será un desafío más para que el Plan Argentina sin Hambre tenga una gestión exitosa que garantice la efectivización del derecho a la alimentación con un adecuado uso de los recursos.

[1] Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO Argentina), Vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús.

[2] Véase Neirotti, N. (Coord.), Mattalini M. y Carpinacci L. (Eds.) (2019), *Evaluación y toma de decisiones. Diálogos entre políticos y académicos para fortalecer la democracia*, Ediciones de la UNLa, Lanús